

CONV 641/03

CERCLE I 14

NOTA

de la: Secretaría

a la: Convención

Asunto: Círculo de Reflexión "Tribunal de Justicia"

1. El 16 de marzo, el Círculo de Reflexión presidido por el Sr. Vitorino concluyó su labor y acordó los términos de su informe final (CONV 636/03) sobre los temas que figuran en su mandato (CONV 636/03, Anexo).
2. No obstante, los miembros del Círculo optaron por tratar sobre cuestiones relativas a la posible competencia del Tribunal de Justicia sobre cuestiones PESC. Para ello, el Círculo celebrará una reunión adicional el viernes 4 de abril de 2003 (14.30 h-16.30 h) en los locales del Parlamento Europeo. El Sr. Vitorino invita a todos los miembros de la Convención interesados en estas cuestiones a que se unan al Círculo para esta reunión. El debate se centrará en particular sobre opciones que figuran en el documento de trabajo 10 adjunto al presente.

CONVENCIÓN EUROPEA

SECRETARÍA

Bruselas, 12 de marzo de 2003

CERCLE I

Documento de trabajo 10

NOTA

de la: Secretaría

al: Círculo de Reflexión "Tribunal de Justicia"

Asunto: **Control judicial de la política exterior y de seguridad común**

I. Situación actual

De conformidad con el artículo 46 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal no es competente en litigios contra los actos de la PESC, incluidos los relativos a la celebración de acuerdos internacionales en el ámbito PESC. Tales actos no pueden por lo tanto ser anulados por el Tribunal, de conformidad con el artículo 230 del Tratado CE.

El artículo 47 del TUE declara, sin embargo, que ninguna disposición de dicho Tratado afectará a las del Tratado CE. De conformidad con el artículo 46 del TUE, las disposiciones del Tratado CE relativas a la competencia del Tribunal de Justicia y al ejercicio de dicha competencia serán aplicables al artículo 47 del Tratado de la Unión Europea. El Tribunal es, por lo tanto, competente para velar por que los actos de celebración de los acuerdos PESC no invadan las competencias otorgadas a la Comunidad por el Tratado CE ¹.

¹ Sentencia del Tribunal de 12 de mayo de 1998 (tránsito aeroportuario), Comisión c/ Consejo, asunto C-170/96, Recopilación, p. I-2763.

Cuando una actuación en el ámbito PESC establezca sanciones económicas contra un tercer país, serán necesarias medidas de aplicación en el nivel comunitario; éstas se adoptarán con base en los artículos 60 y 301 del TCE. En el caso de las sanciones económicas contra individuos, se recurre al artículo 308 TCE. Sin embargo, el Consejo ha interpretado de manera amplia los artículos 60 y 301, utilizándolos como base jurídica para la adopción de sanciones contra personas o asociaciones que ejercen, en la práctica, el control total o parcial de un país. El tribunal ejercita su control judicial respecto a todos estos actos de aplicación de conformidad con el TCE.

II. Posibles enfoques

1. Por lo que se refiere al control judicial por parte del Tribunal de Justicia de las cuestiones PESC en general y de los acuerdos internacionales en particular, la primera opción posible es la de mantener el statu quo tal como se describe en el punto I. En el marco de esta opción, podría contemplarse un cambio en la redacción de los artículos 60 y 301 TCE que explicitase la posibilidad de adoptar sanciones económicas contra individuos con base en estas dos disposiciones.
2. La primera opción, de ampliar las competencias del Tribunal, implicaría que se diera a los tribunales nacionales la posibilidad de utilizar el procedimiento de la decisión prejudicial en materia de interpretación ante el Tribunal de Justicia cuando tengan que decidir sobre cuestiones relativas a la aplicación por los Estados miembros de decisiones PESC a las que éstos deban dar cumplimiento.
3. En la parte I se explicó que las sanciones económicas contra los individuos son ya objeto de control judicial por parte del Tribunal. Si se desea expandir esta posibilidad de recurso a las decisiones PESC que puedan afectar a las personas desde un punto de vista distinto del económico, debería considerarse la posibilidad de dar a los individuos el derecho de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia:
 - ya sea para la anulación de decisiones PESC que les afectan de forma directa e individual (por ejemplo, la prohibición de visados)

- o exclusivamente reclamaciones de daños y perjuicios basadas en la ilegalidad del acto, pero sin que el tribunal tenga derecho a anular el acto o a declararlo no aplicable.
4. Otras opciones con las que se pretende ampliar de manera considerable la competencia del Tribunal podrían también estudiarse pero probablemente modificarían el equilibrio institucional en el ámbito PESC. Serían fundamentalmente las siguientes:
- dar a las instituciones y Estados miembros el derecho a pedir al Tribunal que anule decisiones PESC por haberse adoptado en violación de la Constitución o de una norma de Derecho internacional respecto de la cual la Unión o todos sus Estados miembros hayan acordado que tenga carácter vinculante para ellos.
 - ampliar la competencia del Tribunal a cuestiones PESC con las mismas condiciones que se aplican en ámbitos actualmente cubiertos por el Tratado CE.
5. Todas las opciones para la ampliación de la competencia del Tribunal que se mencionan en los puntos 2 a 4 pueden tener consecuencias sobre la naturaleza de la PESC; la Convención deberá inevitablemente tratarlas durante su debate sobre la PESC.
6. Por lo que se refiere al dictamen previo contemplado en el apartado 6 del artículo 300 TCE, podría considerarse la introducción en el Tratado de la posibilidad de que una institución o un Estado miembro soliciten dicho dictamen, a fin de que el Tribunal de Justicia examine si un acuerdo PESC internacional programado sería compatible con las disposiciones de la Constitución.
-